



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Proyecto discutido y aprobado en sala virtual

Demandante: JOSÉ RICAURTE RUIZ VELÁSQUEZ
Demandados: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y JUNTA NACIONAL
DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
Radicado: 05001 31 05 002 2016 01258 01
Sentencia: S-058

AUTO

Se le reconoce personería como apoderado judicial de POSITIVA S.A., al Dr. JORGE ENRIQUE GÓMEZ VILLADIEGO, T.P. 149.475 del C. S. de la Judicatura, en virtud de su calidad de profesional adscrito a la sociedad JURÍDICA ABOGADOS CONSULTORES S.A.S., de conformidad con el certificado de existencia y representación legal allegado al expediente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación presentado por la apoderada de POSITIVA S.A., en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín el día 19 de diciembre de 2019.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión

se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

JOSÉ RICAURTE RUIZ VELÁSQUEZ demandó a las entidades referidas para que una vez se deje sin efecto el dictamen rendido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y en su lugar se declare que padece de una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, se condene a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. a reconocerle y pagarle la pensión de invalidez de origen laboral a partir del 18 de marzo de 2013, con los intereses moratorios o la indexación de las condenas y las costas del proceso.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que laboró como conductor de vehículo pesado tipo volqueta en el Municipio de Anzá Ant.; que a raíz de su actividad laboral empezó a sentir fuertes dolores de espalda desde el año 2011, los cuales fueron diagnosticados como lumbagos; que su situación de salud persistió y posteriormente se le dictaminó Osteocondrosis y otras patologías relacionadas; que ante la imposibilidad de recuperación y de reincorporarse a su puesto de trabajo, fue calificado por parte de POSITIVA S.A., la que mediante dictamen del 20 de junio de 2014, le determinó una pérdida de capacidad laboral de origen profesional de 34.19%, estructurada el 21 de febrero de 2014; que ante la inconformidad con el resultado, fue remitido a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia en donde se estableció una pérdida de capacidad laboral de 52.08%, estructurada el 5 de agosto de 2014; que el proceso fue remitido en apelación a la Junta Nacional de Calificación de invalidez, pero allí el porcentaje que se le dio fue de 34.15%, aunque manteniendo la fecha de estructuración que dijo la Junta Regional; que para demostrar su grave estado de salud acudió

a la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, la cual emitió dictamen el 19 de enero de 2016 fijando una pérdida de capacidad laboral de 53.05% estructurada el 18 de marzo de 2013; y que el dictamen de la Junta Nacional no se encuentra ajustado a derecho en tanto no fueron calificadas todas y cada una de las patologías diagnosticadas.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. acepta la afiliación del demandante a esa entidad y las distintas calificaciones de pérdida de capacidad laboral realizadas dentro del trámite administrativo, advirtiendo que el dictamen aportado con la demanda no se ajusta a la realidad y está sobrevalorando las deficiencias según el Manual de Calificación. Se opuso además a las pretensiones de la demanda indicando que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez es la entidad competente e idónea para realizar este tipo de valoraciones. Como excepciones propuso inexistencia del grado de invalidez para adquirir pensión, inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, ausencia de causa para demandar, enriquecimiento sin justa causa y prescripción.

La JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, por su parte, también se opuso a las pretensiones de la demanda ya que su dictamen cuenta con plena validez, legalidad y legitimidad, advirtiendo que los particulares no están facultados para emitir ese tipo de conceptos. Excepcionó legalidad de la calificación, improcedencia del *petitum*, inexistencia de prueba idónea para controvertir el dictamen, carga de la prueba a cargo del contradictor, la variación en la condición clínica del paciente exime de todo cargo a la entidad, ilegalidad de las pretensiones, inexistencia de obligación y de prueba frente al perjuicio que se pretende, improcedencia de las pretensiones y buena fe de la demandada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 19 de diciembre de 2019, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, dispuso acoger el dictamen emitido por el CENDES a través del cual se determinó que el demandante tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 50% de origen laboral, estructurada el 9 de febrero de 2015, y en consecuencia, CONDENÓ a POSITIVA S.A. a reconocerle y pagarle al demandante la pensión de invalidez desde esa fecha, ordenando como retroactivo pensional la suma de \$47'207.090, junto con los intereses moratorios liquidados dos meses después de la ejecutoria de la sentencia y las costas del proceso.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de POSITIVA S.A. interpuso y sustentó el recurso de apelación, indicando que se debe tener en cuenta que el dictamen emitido por la Junta Nacional dentro del trámite administrativo, establece que conforme a lo dispuesto por la tabla 1.16 del Decreto 917 de 1999, en cuanto a los síndromes dolorosos de columna, se aplica la máxima calificación establecida y acoge la restricción de movimiento de la columna, por lo que no hay lugar a una calificación doble por ese sentido. De igual forma, se puede ver que en ese aspecto de calificación del dolor de columna, el CENDES hace una homologación completamente distinta a la realizada por las Juntas de Calificación e incluso por la misma Facultad Nacional de Salud Pública.

En cuanto al componente psicológico o mental, esta entidad (CENDES) también hace un aumento excesivo en comparación con las otras entidades que han calificado al demandante, esto porque califica un componente mental con un 20%, el cual no está sustentado en la historia clínica psiquiátrica y psicológica, toda vez que a diferencia de los dictámenes anteriores, la única historia clínica diferente sobre la

cual pudo haber basado esa parte del dictamen, es con posterioridad a junio del 2015 y hasta 2016. Sorprende que se haya realizado un aumento de la calificación cuando ha sido marcado desde que se empieza el trámite administrativo, incluso en el dictamen traído por el demandante y emitido por la FNSP, una calificación del 10% en la que se toma como deficiencia calificable o diagnostico calificable unos trastornos del humor, y ya pasa entonces el CENDES a hablar de depresión mayor moderada, ansiedad generalizada, trastorno de adaptación con ánimo triste, con varios intentos suicidas, sin que esta última historia clínica (Psicológica) de una muestra de esa depresión mayor moderada, sino por el contrario, se puede notar una mejoría leve del aspecto mental.

En caso de confirmarse la sentencia, solicita se revise en primer lugar la liquidación del retroactivo pensional, toda vez que el Juzgado lo hace particularmente en el año 2015 sobre 12 mesadas, pero el derecho pensional empieza para el demandante a partir del 9 de febrero de ese año, por lo que habría una sobre valoración en cuanto al retroactivo de esa anualidad. También solicita se revoque la sentencia en lo concerniente a los intereses moratorios, ya que la considera una sentencia adelantada y presumiendo mala fe en el cumplimiento de la obligación una vez quede en firme la sentencia, sin que haya lugar a emitir ese juicio de valor teniendo en cuenta que siempre ha sido cumplidora de sus funciones acatando las sentencias emitidas en esta jurisdicción ordinaria.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. presentó alegatos de conclusión solicitando se revoque el fallo de primera instancia, ya que el dictamen proferido por la Junta Nacional de Calificación se encuentra en firme, goza de plena legalidad, y deviene del procedimiento estatuido en el decreto 019 de 2012, que modificó el artículo 41 de la

ley 100 de 1993, siendo los dictámenes emitidos por estas entidades los que gozan de un valor probatorio técnico, debido a que son producto de un análisis científico que recae sobre la historia clínica y exámenes. Insiste en que dicha calificación se encuentra en firme por ser el órgano calificador de cierre y que no existe evidencia técnica y científica para siquiera especular del carácter laboral de la patología, por lo que no se cumplen con los presupuestos exigidos por el artículo 7 de la ley 776 de 2002 para tal fin.

CONSIDERACIONES:

Según viene de verse, el señor JOSÉ RICAURTE RUIZ VELÁSQUEZ pretende el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen ocupacional por considerar que sufre de una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, lo cual fundamenta en que los dictámenes de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y de la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, no son coherentes con su complejo estado patológico, a diferencia de la valoración de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en la que se estableció una merma laboral del 53.05%

Teniendo en cuenta el recurso de apelación presentado precisamente por POSITIVA S.A. en contra de la sentencia condenatoria proferida en primera instancia, la que se adoptó con base en un dictamen realizado en el curso del proceso por el Centro de Estudios en Derecho y Salud CENDES de la Universidad CES, corresponderá a la Sala establecer cuál de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos resulta más apropiado a la situación del demandante y con base en ello definir si hay lugar o no al reconocimiento de la pensión de invalidez que se reclama. Pensión que en cualquier caso estaría a cargo de POSITIVA S.A. en tanto el origen laboral de la enfermedad del señor JOSÉ RICAURTE no es un asunto que esté en discusión.

1. Pensión de invalidez – pérdida de capacidad laboral

Es importante recordar que las pensiones de invalidez de origen profesional están destinadas a proteger al asegurado de la pérdida total o parcial de su capacidad laboral con ocasión de una invalidez generada a raíz de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Para ello, es decir, para que se genere el derecho a una pensión por ese hecho, se hace necesario acreditar los requisitos que exige la ley, en este caso, la ley 776 de 2002 *“Por la cual se dictan normas sobre la organización administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales”*. En tal sentido, al igual que lo hace la ley 100 de 1993 en su artículo 38, el artículo 9º de la ley 776 indica que la condición o estado de invalidez se genera en *“la persona que por causa de origen profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral...”*.

Significa lo anterior, que es requisito indispensable para entrar a determinar si hay lugar a reconocer la pensión solicitada, que al afiliado se le haya definido su estado de invalidez y para tal efecto se requiere de una calificación por las entidades competentes realizado con base en el Manual Único de Calificación.

Ahora bien; previo a resolver la situación planteada, la Sala considera importante poner en contexto los diversos dictámenes mediante los cuales se ha valorado el estado de salud del señor RUIZ VELÁSQUEZ:

1. En primer lugar, i) mediante dictamen del 20 de junio de 2014, POSITIVA S.A. ii) determinó una pérdida de capacidad laboral al demandante del 34.19%, iii) con fecha de estructuración el 21 de febrero de ese mismo año por las patologías de *“Trastorno de los discos intervertebrales y trastorno de adaptación”* (fls. 14 a 19).
2. Por su parte, ante la inconformidad planteada por el afiliado, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia i) emitió su dictamen del 30 de octubre de 2014, en el que se estableció que el

demandante padecía *"Dolor crónico intratable, otros trastornos no especificados, lumbago con ciática y trastornos de adaptación"*, patologías que arrojaron ii) un porcentaje de 52.08%, iii) estructurada el 5 de agosto de 2014. (fls. 52 a 56).

3. La anterior decisión fue apelada y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, i) a través del dictamen del 25 de junio de 2015 - que es el que se cuestiona con la demanda - definió como diagnóstico *"otros trastornos especificados de los discos intervertebrales, lumbago no especificado y trastornos de adaptación"*, ii) disminuyendo el porcentaje de pérdida de capacidad laboral a 34.15%, iii) e igual fecha de estructuración que la anterior. (fls. 57 a 63).
4. Con la demanda se presentó un dictamen i) elaborado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia el 19 de octubre de 2015, en el que se definió como diagnóstico *"Dolor lumbar crónico – espalda fallida -, trastornos AMA Columna Lumbar y trastorno de adaptación"*, ii) estableciendo un porcentaje de 53.05%, iii) y con estructuración el día 18 de marzo de 2013. (fls. 64 a 72).
5. En el curso del proceso, i) concretamente el 21 de junio de 2018, el Centro de estudios en Derecho y Salud – CENDES - de la Universidad CES, ii) dictaminó una pérdida de capacidad laboral al actor de 55.90% iii) estructurada el 9 de febrero de 2015, teniendo en cuenta como patologías *"Trastorno de los discos intervertebrales, síndrome post-laminectomía, síndrome de espalda fallida, lumbago crónico, dolor crónico somático intratable, trastorno de adaptación y depresión severa"* (fl. 336 a 349).

Con este panorama clínico, pasará la Sala a resolver los cuestionamientos que hace la apoderada de POSITIVA S.A. y que tienen que ver con la calidad de inválido que dice tener el demandante.

Pero antes de acometer el examen correspondiente a los dictámenes rendidos por los peritos y atendiendo a uno de los argumentos principales que han planteado las demandadas desde sus respectivas contestaciones a la demanda, e incluso en los alegatos de conclusión presentados en esta instancia, concretamente en el caso de POSITIVA S.A., esta Sala considera pertinente puntualizar y recordar que, conforme a los artículos 11 inciso 2º y 40 del decreto reglamentario 2463 de 2001, es posible que los dictámenes de las juntas puedan ser controvertidos ante la jurisdicción ordinaria en lo laboral, los cuales incluso pueden ser desvirtuados con la aportación de otros medios de prueba, correspondiéndole al juez evaluar y establecer la realidad de cada situación. Según lo establece aquella norma, *"Los dictámenes de las Juntas de Calificación de Invalidez no son actos administrativos y sólo pueden ser controvertidos ante la justicia laboral ordinaria con fundamento en el artículo 2º del Código Procesal Laboral"*.

Lo anterior se complementa con lo establecido en el decreto 1352 de 2013, el cual, de manera específica, dispone en su artículo 44 que: *"Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos en firme por las Juntas de Calificación de Invalidez, serán dirimidas por la Justicia Laboral Ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente"*.

En otras palabras, los dictámenes emitidos por las juntas calificadoras no son prueba solemne o incontestable, no son definitivos ni inmutables, no atan de ninguna manera al Juez y no tienen carácter absoluto o vinculante de forma tal que no permita apartarse de lo que en ellos se dice, pues se trata de un acto sometido a control jurisdiccional. Así lo ha considerado además la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la que citó el Juez de primera instancia del 19 de octubre de 2006, rad. 29.622, en la que se reitera lo dicho en providencia del 13 de septiembre de 2006, rad. 29.328 y cuyo criterio ha sido acogido más

adelante en providencias como la 31.062 del 18 de marzo de 2009, la 53986 del 4 de noviembre de 2015, o más recientemente la SL 1044 del 20 de marzo de 2019, rad. 68074. En la primera de ellas se dijo lo siguiente a modo de ilustración:

“Ciertamente, la Corte ha estimado que en la actualidad el estado de invalidez de un trabajador corresponde establecerse mediante la valoración científica de las juntas de Calificación, a través del procedimiento señalado en los reglamentos dictados por el Gobierno Nacional. Pero la Sala de Casación Laboral no ha sostenido que los parámetros señalados en el dictamen de la Junta sean intocables. La regla sentada en el fallo citado por el recurrente como apoyo de su criterio es que, en principio, la declaración del estado de invalidez es materia de expertos y no corresponde, en los actuales momentos, a la entidad de seguridad social, como ocurría antes, sino a unos entes autónomos, como son las juntas Regionales en primera instancia, y la Nacional en último grado.

De ninguna manera ha considerado la Corte que los hechos relativos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre el hecho genitor de la minusvalía, tenidos en cuenta por uno de tales entes, o por ambos si se agotan las dos instancias, sean materia incontrovertible ante la jurisdicción del trabajo (...)

Reitera la Corte, entonces, su criterio ya decantado de que los jueces del trabajo y de la seguridad social sí tienen plena competencia y aptitud para examinar los hechos realmente demostrados que contextualizan la invalidez establecida por las juntas, a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto. Ello, por supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las discapacidades y minusvalías”.

Así entonces, una vez revisados los peritajes que obran en el expediente, especialmente los de la Junta Nacional por ser el fundamento de las excepciones que propone la entidad, así como el

del CENDES por haber servido de soporte al Juez para adoptar su decisión condenatoria, claramente se observa que los mismos se contraponen en su resultado, puesto que aquél concluye que el demandante no alcanza el 50% de pérdida de capacidad laboral que exige la ley para ser considerado inválido, pues allí se estableció un porcentaje de 34.15%, mientras éste estima que ese porcentaje es, concretamente, del 55.90%.

Luego del estudio realizado por la Sala, se puede concluir que la posición adoptada por el juez de primera instancia en cuanto reconoce la pensión de invalidez al actor con base en el dictamen emitido por el CENDES que estableció un porcentaje de 55.90%, está ajustada a derecho, gracias a que existen elementos de juicio suficientes, técnicos y científicos, firmes y precisos, para acoger lo allí establecido.

A esta conclusión se llega al apreciar el dictamen con un análisis lógico y comparativo de los fundamentos y las conclusiones brindadas por los expertos, teniendo en cuenta además la solidez, claridad y calidad e integralidad en el desarrollo de dicho estudio técnico, así como la idoneidad del perito, y al observar que el análisis se hizo conforme a la evaluación médica realizada y al amplio y actualizado historial clínico del señor RUIZ VELÁSQUEZ.

Para esta Sala de Decisión, esta nueva valoración tiene pleno respaldo clínico al haberse emitido además por una entidad plenamente competente, capacitada y autorizada para tales efectos, sin que lo resuelto por ella implique necesariamente que el dictamen de la Junta Nacional se encuentre errado y por ende deba ser anulado.

Obsérvese cómo con posterioridad al mes de junio de 2015 están documentados en el peritaje nuevas constancias médicas de consultas, tratamientos y conceptos, a través de especialidades e instituciones tales como la clínica del dolor Orthohand, el Hospital

Ortopédico S.A.S., la ESE Hospital San Francisco de Asís del Municipio de Anzá, entre otros (fs. 340 vto. a 341).

De suerte que, la situación de salud que padece el actor conduce a considerarlo como una persona inválida, hecho concreto que se ha consolidado como consecuencia de los problemas degenerativos y progresivos de espalda que padece, sumado a los trastornos depresivos o de ansiedad que con ocasión de sus dolores con carácter de intratables ha desarrollado en los últimos años.

Al revisar las experticias que se ponen en tela de juicio desde cada uno de los extremos de la litis, se pueden evidenciar concordancias, pero también divergencias, como a continuación se destaca:

- En ambos casos la valoración se hizo con base en el decreto 917 de 1999.
- Existe una diferencia temporal de 3 años entre el estudio realizado por la Junta Nacional respecto al del CENDES, pues aquel fue emitido en junio 25 de 2015, mientras que el último fue elaborado en junio 21 de 2018.
- El porcentaje determinado en cada uno de ellos está discriminado de la siguiente manera:

Concepto	Junta Nacional	Cendes
Deficiencias	14%	26%
Discapacidades	6.90%	9.4%
Minusvalías	13.25%	20.5%
Total	34.15%	55.90%

- En cuanto a los diagnósticos calificados, la Junta Nacional aplicó simplemente las tablas 12.4.7 por la patología de trastorno adaptativo con ánimo triste, asignando un porcentaje de 10% y la 1.16 relacionada con dolor lumbar crónico de 10%, lo que lleva a una suma combinada de 14%.

- El CENDES por su parte, toma en consideración como deficiencia principal el denominado Síndrome post-laminectomía con síndrome de espalda fallida y signos de fibrosis peridural, cambios degenerativos en articulaciones y dolor crónico, aplicando la tabla 1.16.1.2.3.3. que da 20% y coincidiendo en aplicar la tabla 12.4.7 respecto al trastorno de adaptación, aunque aplica un 20% al incluir lo que denominó *depresión mayor moderada y ansiedad generalizada*, dando como resultado una suma combinada de 26%. (f. 345 vto.)

Esa última situación es particularmente cuestionada por la recurrente cuando sostiene que en la historia clínica no está documentada la existencia de una depresión mayor moderada. En un principio se advierte que, aunque eventualmente no lo llegare a estar, lo que incluso se desvirtúa con las constancias médicas que obran en el expediente como más adelante se verá, en cualquier caso y en defecto de ello, significaría que se aplique al menos el 10% que tuvo en cuenta la propia Junta Nacional, lo que de todas maneras comporta una suma combinada como deficiencia de 23% que no afecta el resultado final adoptado por el CENDES como pérdida de capacidad laboral.

De otro lado, respecto a la valoración en general por el criterio deficiencia, el perito del CENDES señala como justificación para incluir no solo el dolor lumbar crónico y el trastorno adaptativo, lo siguiente:

“Con relación a las diferencias existentes con la calificación de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, considero que ésta no refleja la condición del trabajador para el momento de la calificación y minimiza su afectación funcional.

Su condición de las secuelas por la cirugía fallida y el síndrome doloroso postlaminectomía, afectan de manera importante la movilidad del trabajador, su capacidad para movilizar cargas y lo lleva a un estado de invalidez material en el cual no es

posible que realice su trabajo habitual, por lo que se hace necesario colocar el valor máximo definido en la tabla.

Esa condición ha afectado de manera tan severa la movilidad del trabajador, que requiere para las actividades de la vida diaria la ayuda de terceras personas.

(...)

El impacto de estas severas alteraciones de su salud, en su relacionamiento social y familiar y su percepción de su condición a nivel personal, es necesario que se vea reflejado en la calificación de su discapacidad y minusvalía y que en conjunto llevan a que se pueda concluir que su condición de invalidez material se vea reflejada en los criterios de calificación definidos en el Decreto 917 de 1999”.

Descripción que tiene respaldo en una serie de documentos de la historia clínica y que permiten que en realidad se aplique esa tabla y no otra como lo pretende POSITIVA S.A. y que se resumen en los siguientes:

- Desde junio 16 de 2013 se registró que se trataba de un “paciente ya operado con persistencia de dolor y limitación funcional...” fls. 117.
- Desde el 21 de noviembre de 2013 en la clínica ORTHOHAND, se dejó constancia de que se trataba de un “caso grave, complejidad media ya dado de alta por neurocirugía, no hay posibilidad de mayor mejoría por más terapias, no hay posibilidad de más tratamiento... queda como secuela parcial definitiva dolor crónico moderado, limitación de movilidad columna, discapacidad para caminar más de 15 minutos, discapacidad para estar en una misma posición más de 15 minutos, incapacidad para agacharse...” fls. 99.
- En febrero 21 de 2014 por la Junta de rehabilitación de fisiatría de ORTHOHAND, se conceptuó que tenía “... pronóstico funcional

regular y ocupacional malo, por el dolor intenso a incapacitante, el cual no le permite adoptar la misma posición por más de 5 minutos". fls. 97.

- El 20 de agosto de 2014 se registra en la entidad ORTHOHAND como diagnóstico dolor somático secundario a lumbalgia y síndrome de espalda fallida, conceptuando que se trata de un paciente en el que persiste el dolor a la deambulación y que "... se exacerba con bipedestación prolongada", fl. 78.
- El 5 de noviembre de 2014 se documentó en esa misma institución médica que se trata de un paciente que "... presenta síntomas neuropáticos continuos", derivados del diagnóstico de dolor somático con componentes neuropáticos secundarios a discopatía lumbar Fl. 77.
- En distintas valoraciones por psiquiatría iniciadas en agosto de 2013 (citas más o menos constantes, una cada mes en general), se hizo relación a ideas de desesperanza, ánimo triste, abandono y conducta motora limitada, condición que se mantuvo durante 2014 y 2015, siendo la última que se conoce la de mayo 6 de 2016, fls. 120 a 138 y 201 a 204. Tales valoraciones fueron atendidas en SYNAPSIS Psiquiatría Laboral, y en ellas se dejan constancia tales como que se encuentra en tratamiento psicofarmacológico, intensidad de sintomatología depresiva intensificada por estresores de tipo económico que alteran el sueño, e igualmente, que se dan signos de alarma para consultar a urgencias de psiquiatría "(presencia de ideas activas de muerte y suicidio, conductas auto lesivas, gestos e intentos de suicidio, descuido progresivo en higiene personal, hiperoxia marcada, predominio de síntomas negativos)".

Y finaliza indicándose en la cita de febrero 5 de 2016 (fls. 201/202, con mayúsculas del original): "SE HACE ÉNFASIS EN QUE ES FUNDAMENTAL QUE EL PACIENTE TENGA TRATAMIENTO CONTINUADO

PARA FAVORECER PRONÓSTICO Y RESPUESTA, DEBE ASISTIR DE MANERA OPORTUNA A CONSULTAS Y NO INTERRUMPOR MEDICACIÓN ORDENADA, PACIENTE CON IMPORTANTE DIFICULTAD PARA MOVILIDAD POR SÍNTOMAS DOLOROSOS, POR LO QUE REQUIERE TRANSPORTE PUERTA A PUERTA CON ACOMPAÑANTE PAR ASISTIR A CONSULTAS”

- En mayo 20 de 2015 fue atendido en urgencias en la E.S.E. Hospital San Francisco de Asís del Municipio de Anzá, en donde se dejó constancia de lo ocurrido en los siguientes términos: *“Paciente con episodio depresivo moderado-severo, riesgo de auto y heterolesión, con insomnio y múltiples estresores que no permiten control afectivo”*, fls. 142 y 143.
- En atención por psiquiatría el 26 de febrero de 2018 en la IPS Remy, según consta en el dictamen elaborado por el CES, el Dr. Gabriel Vargas Cuadros indica que se trata de *“Cuadro de alrededor de 5 años de síntomas depresivos, tristeza, minusvalía, anhedonia, temor a diversas situaciones e insomnio global...”*, incluyendo además como impresión diagnóstica, *“Depresión mayor moderada”*, fls. 340 vto.

Finalmente, respecto al momento que se tuvo en consideración para definir la fecha de estructuración, que fue el 9 de febrero de 2015, se advierte que corresponde a la atención por Neurocirugía en la Clínica Universitaria de la Universidad Pontificia Bolivariana en donde se concluye que no encuentra en el momento forma para que *“... desde el punto de vista neuroquirúrgico se pueda ayudar”*. fl. 156.

Con base en esas valoraciones médicas y los conceptos emitidos por los especialistas según la amplia historia clínica que del paciente ha sido aportada al expediente, no puede concluirse que el perito ha sobrevalorado el diagnóstico, por el contrario, se advierte una real

afectación en la condición de salud del paciente sin que la recurrente presente soporte alguno para contradecirlo.

Con todo lo anterior, para la Sala es admisible el criterio médico del Centro de Estudios en Derecho y Salud – CENDES – cuando determina la invalidez del demandante, pues las condiciones de salud en que se encuentra y que viene padeciendo desde el año 2011, le impiden un adecuado desarrollo, no solo de sus actividades cotidianas como allí se constata respecto a la necesidad de ayuda para bañarse, para vestirse, para caminar, para deambular por escaleras o para agacharse, fls. 343, sino también, de las actividades laborales desempeñadas y que se convierten en un elemento adicional y fundamental a la hora de establecer el derecho que reclama.

Consecuentes con todo lo anterior, encuentra la Sala que se dan las condiciones para acceder al pago de la pensión de invalidez reclamada, por lo que en ese sentido se confirmará la sentencia de primera instancia.

2. Retroactivo pensional.

No es una situación que se discuta el hecho de que la pensión de invalidez del demandante debe ser reconocida desde la fecha de su estructuración, lo que en este caso fue definido con claridad en el 9 de febrero de 2015, sin que nada al respecto cuestione la entidad demandada.

El asunto que se debe revisar, atendiendo al recurso que en tal sentido se presentó, tiene que ver con el valor que obtuvo el Juez de primera instancia como retroactivo pensional, que, causado desde aquella fecha hasta el 31 de diciembre de 2019, arrojó la suma de \$47' 207.090.

Una vez verificado ese valor, encuentra la Sala que ciertamente se presenta una pequeña diferencia respecto a lo que en realidad

corresponde, ya que si la pensión es reconocida desde el 9 de febrero de 2015, el valor a pagar liquidado hasta diciembre de 2019 asciende con exactitud a la suma \$47`035.250, por lo que se procederá a modificar la decisión de primer grado, advirtiendo que esa suma debe ser actualizada hasta el mes de marzo de 2021 como lo exige el inciso segundo del artículo 283 del Código General del Proceso, la cual asciende a **\$61`172.267**, obtenido de la siguiente manera:

Año	IPC	Valor pensión (mínimo)	# mesadas	Total Retroactivo (mínimo)
2015	6,77%	\$ 644.350	11 y 22 días	\$ 7`560.373
2016	5,75%	\$ 689.454	13	\$ 8`962.902
2017	4,09%	\$ 737.717	13	\$ 10`041.366
2018	3,18%	\$ 781.242	13	\$ 10`156.146
2019	3,80%	\$ 828.116	13	\$ 10`765.508
2020	1,61%	\$ 877.803	13	\$ 11`411.439
2021		\$ 908.526	3	\$2`725.578
Total				\$61`172.267

A partir del 1 de abril de 2021 la entidad continuará pagando una mesada pensional equivalente a \$908.526 y hasta tanto se mantengan las causas que le dieron origen, actualizada anualmente conforme lo disponga el Gobierno Nacional.

Se advierte, además, que, por ministerio de la ley, la entidad cuenta con la facultad de hacer los descuentos en salud correspondientes, en los términos del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, por lo que en este aspecto se adicionará la decisión de primer grado.

3. Intereses moratorios

Para la Sala no resulta admisible que se imponga una condena al reconocimiento y pago de intereses de mora, contados a partir de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia siempre que no se haya procedido al pago de las mesadas pensionales, como lo dispuso el a quo.

No se olvide que tales intereses propenden por el pronto pago de las mesadas pensionales, para así proteger los derechos de los pensionados frente a las dilaciones injustificadas en los trámites internos administrativos para su reconocimiento, cuando el derecho sea claro, las cuales hasta ahora no se han configurado en estricto sentido, pues ni siquiera la obligación de reconocimiento pensional resulta aún exigible, lo que ocurrirá una vez la decisión quede en firme.

En esos términos, le asiste razón a la entidad demandada cuando cuestiona la condena impuesta por este concepto y en la forma dicha, más aun teniendo en cuenta el criterio desarrollado por la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la SL 13388 de 2014, la SL 11234 de 2015, la SL 763 de 2018 y la SL 4989 del 14 de noviembre de 2018, en las que ha considerado que si la entidad deudora se vale de argumentos jurídicos valederos o legamente verificables para adoptar determinada decisión y obró en virtud de los requisitos propios que exige la ley para tales efectos, no está obligada al reconocimiento de los intereses de mora que se reclaman.

Es lo que ocurrió en este evento, en el cual la entidad negó el reconocimiento de la prestación apoyada en dos dictámenes, tanto el propio como el de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que descartaban el estado de invalidez del accionante, al paso que la presente condena solo surge en virtud de otros dictámenes posteriores, uno, el de la facultad Nacional de Salud Pública de la U. de Antioquia dado a conocer con la demanda misma, pero especialmente otro, el del CENDES, practicado al interior del debate probatorio del proceso.

Con base en lo anterior, como la solicitud pensional del señor RUIZ VELÁSQUEZ fue resuelta de acuerdo a lo establecido en la ley 776 de 2002 y fue solamente dentro del marco del proceso judicial que se determina su calidad de inválido por tener una pérdida de capacidad

laboral superior al 50%, es a partir de este momento que la entidad está obligada al reconocimiento de la prestación, de modo que no hay lugar a hablar de mora propiamente como para proceder a reconocer los intereses que por tal situación se reclaman.

No son más los temas a resolver. Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 2º Laboral del Circuito de Medellín el día 19 de diciembre de 2019, pero con las siguientes novedades según quedó establecido en la parte motiva:

Primero. La MODIFICA en cuanto que el valor por concepto de retroactivo pensional a que tiene derecho el señor JOSÉ RICAURTE RUIZ VELÁSQUEZ, liquidado desde el 9 de febrero de 2015 y actualizado hasta el mes de marzo de 2021 tal y como lo exige el inciso segundo del artículo 283 del Código General del Proceso, asciende a **\$61`172.267**. A partir del 1 de abril de 2021 la entidad continuará pagando una mesada pensional equivalente a \$908.526 y hasta tanto se mantengan las causas que le dieron origen, actualizada anualmente conforme lo disponga el Gobierno Nacional.

Segundo. La REVOCA en cuanto condenó a la demandada al reconocimiento y pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, y en su lugar niega dicha pretensión y la ABSUELVE por este concepto; y

Tercero. La ADICIONA en el sentido de **AUTORIZAR** a POSITIVA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, para que del retroactivo pensional

reconocido al demandante, realice los descuentos respectivos al Sistema de salud.

Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso.

<p>EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR</p> <p>Que la presente providencia se notificó por estados N° 054 del 5 de abril de 2021</p> <p>Consultable aquí: https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125</p>

Firmado Por:

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

FRANCISCO ARANGO TORRES

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3f8755dbc585394a6b4fc70138643b136126c6f849f709f7ef9a8abc5013cd1f**

Documento generado en 26/03/2021 02:29:01 PM